

El discurso político de la izquierda colombiana sobre las dificultades de su acceso al poder gubernamental (1991-2021)

Jerónimo Ríos Sierra¹

Recibido: 09-04-2022 // Aceptado: 21-12-2022

Resumen. Este trabajo analiza el discurso político producido por una parte de las élites que representan a la izquierda política colombiana en relación con las dificultades que han lastrado al progresismo en el acceso al poder gubernamental. A partir de nueve entrevistas en profundidad con personalidades como Ernesto Samper, Angelino Garzón, Antonio Navarro Wolff, Clara López, Piedad Córdoba y *Timochenko*, entre otros, se identifican y problematizan tres factores en concreto, que mayormente son compartidos por todos los entrevistados: 1) la debilidad ontológica del promisorio orden constitucional de 1991; 2) el alcance y afectación del conflicto armado y, finalmente, 3) aspectos particulares del sistema político colombiano como el arraigo de las redes clientelares o la profunda cultura política conservadora, entre otros. A pesar de lo anterior, se reconoce que 4) el acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC-EP libera un espacio para la izquierda que parecería explicar buena parte de la transformación experimentada en los últimos años y que hace que el sistema político colombiano disponga, de forma cada vez más clara, de una izquierda erigida como alternativa gubernamental.

Palabras clave: acuerdo de paz; Colombia; Constitución de 1991; discurso político; FARC-EP; izquierda.

[en] The political discourse of the colombian left on the difficulties of its access to governmental power (1991-2021)

Abstract. This paper analyzes the discourse produced by a part of the elites that represent the Colombian political left in relation to the difficulties that have hampered progressivism in accessing government power. Based on nine in-depth interviews with personalities such as Ernesto Samper, Angelino Garzón, Antonio Navarro Wolff, Clara López, Piedad Córdoba or *Timochenko*, the work identifies and problematizes three specific factors, which are mostly shared by all those interviewed: 1) the ontological weakness of the promising constitutional order of 1991; 2) the scope and impact of the armed conflict and, finally, 3) particular aspects of the Colombian political system such as the roots of patronage networks or the deep conservative political culture, among others. Despite the above, it is recognized that 4) the Peace Agreement signed in 2016 with the FARC-EP frees up space for the left. An aspect that would seem to explain a large part of the transformation experienced in recent years and in which the Colombian left is increasingly stronger as an alternative government.

Keywords: peace agreement; Colombia; Constitution of 1991; political discourse; FARC-EP.

Sumario. 1. Introducción. 2. Discusión teórica. 3. Aspectos metodológicos. 4. Origen y evolución de la izquierda democrática en Colombia. 5. Las dificultades provenientes del modelo constitucional. 6. Las dificultades producidas por el conflicto armado interno. 7. Las dificultades provenientes de un sistema político restrictivo para la izquierda. 8. El nuevo escenario de disputa política tras el acuerdo de paz con las FARC-EP. 9. Conclusiones. 10. Bibliografía.

Como citar: Ríos Sierra, J. (2023). El discurso político de la izquierda colombiana sobre las dificultades de su acceso al poder gubernamental (1991-2021). *Polít. Soc. (Madr.)* 60(1), 81477. <https://dx.doi.org/10.5209/poso.81477>

Agradecimientos. Este trabajo es resultado del proyecto PR65/19-22461, denominado Discurso y Expectativa sobre la Paz Territorial en Colombia. De este el autor es el investigador principal y ha sido financiado en la convocatoria de Proyectos de I+D para jóvenes doctores, resultado del marco del convenio plurianual entre la Administración de la Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid de 2019.

1. Introducción

El siguiente trabajo analiza el discurso producido por las élites que conforman parte de la izquierda colombiana respecto de los factores que explican su incapacidad, hasta la llegada a la presidencia de Gustavo Petro en

¹ Universidad Complutense de Madrid
E-mail: jeronimo.rios@ucm.es

2022, para haber asumido las riendas de un Gobierno nacional en la historia democrática del país. Los relatos que se incorporan a este análisis provienen, exclusivamente, de sectores de izquierda que han tratado de intervenir en la política formal y en los asuntos estatales, excluyéndose otras formas de acción política. La pregunta de partida es la siguiente: ¿cómo se problematizan e interpretan los aspectos que, para la izquierda partidista, han impedido su acceso al poder en Colombia hasta la victoria de Gustavo Petro en 2022? Se reconocen entre los entrevistados tres elementos explicativos: 1) el desdibujamiento de un orden constitucional muy garantista, como es el de 1991, resultado de un modelo económico profundamente neoliberal; 2) el papel limitador y deslegitimador que ha supuesto el conflicto armado interno y que ha desembocado en un Estado que, a través de la militarización, ha limitado las expresiones de cambio y protesta social; y 3) los rasgos propios de un modelo político *patrimonializado* por las élites, la corrupción y las redes clientelares, además de otros rasgos particulares del sistema político del país.

El interés reviste en analizar un caso como el de Colombia, el cual ideológicamente es uno de los países más conservadores del continente latinoamericano y con una competencia electoral muy restrictiva (Melo, 2017). Igualmente, desde los comienzos de la Guerra Fría ha mantenido una relación muy cercana con Estados Unidos (Trejos, 2011), al ser un socio prioritario en el desarrollo de su código geopolítico (Tickner, 2007). Aparte, está la longevidad y virulencia del conflicto más violento de América Latina (Kruijt *et al.*, 2019), que ha contribuido a debilitar los anclajes institucionales, territoriales y sociales de su modelo democrático.

Además de lo poco que se ha producido académicamente al respecto, un atractivo adicional guarda relación con algunos cambios importantes producidos en Colombia en los últimos años. Las expresiones de protesta social han ganado visibilidad desde 2019 (Umaña, 2021), y tras la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias–Ejército del Pueblo (FARC-EP), se ha liberado un notable espacio para la izquierda. Tanto es así que, en los comicios de 2018, ganaron protagonismo nuevos clivajes que por mucho tiempo habían estado opacados por la superación estricta del conflicto armado. De hecho, la izquierda colombiana, liderada por Gustavo Petro, aunque perdió las elecciones frente al candidato *uribista*, Iván Duque, consiguió el mejor resultado de la historia democrática del país (Saffon y Güiza, 2019). Este es un hecho que ha quedado superado tras los comicios legislativos de marzo de 2022, en donde el Pacto Histórico Nacional —una plataforma que aglutina diferentes expresiones, partidos y movimientos progresistas— fue la fuerza política con más representación en el Senado; esto sumado a la victoria presidencial de Gustavo Petro en la segunda vuelta de las elecciones celebradas en junio de 2022.

El presente trabajo se organiza en cinco partes. Primero, se lleva a cabo una revisión de alguna de la literatura más destacada en el estudio del sistema político colombiano. Tras esto se presentan los aspectos metodológicos del trabajo. Con posterioridad, se contextualiza el origen y evolución de la izquierda democrática en Colombia. En cuarto lugar, se analizan los tres aspectos que los entrevistados identifican como particularmente explicativos de la tradicional debilidad que ha atesorado la izquierda colombiana. Es decir: 1) el orden constitucional y su debilitamiento por el modelo económico; 2) el conflicto armado y 3) el particular funcionamiento de un sistema político que parece ofrecer nuevas posibilidades tras el acuerdo de paz de 2016, y que merece una mención especial. Se concluye reconociendo líneas de trabajo y nuevos interrogantes que deben ser asumidos por investigaciones futuras que, en todo caso, contribuirán a un análisis reposado de lo sucedido tras la recién llegada de la izquierda al poder.

2. Discusión teórica

El particular acervo conservador del sistema político colombiano ha sido ampliamente estudiado. Destaca la escasa afectación que su violencia estructural ha supuesto a la hora de explorar fórmulas de gobierno progresistas (Sandoval, 2020). Si bien este marcado conservatismo se ha proyectado no solo durante todo el siglo xx (Pécaut, 2006a); una vez que comienza el ciclo progresista latinoamericano con el cambio de centuria, espoleado por el auge de las *commodities*, el ciclo expansivo de la economía, el cambio de rumbo geopolítico de Estados Unidos tras el 11-S y la llegada de diferentes liderazgos carismáticos, el conservatismo colombiano se mantuvo inalterado. Así lo muestra el Barómetro de las Américas publicado por LAPOP y el *Análisis de cultura política de la democracia en Colombia y en las Américas*, editado por USAID en 2014 (2014: 179). Allí se puede observar cómo entre 2004 y 2005, la posición ideológica promedio en Colombia alcanza el valor de 6.7 sobre 10, manteniéndose de manera constante, el resto de la década, en valores superiores a 6.0. Un hecho que sitúa al país como uno de los más conservadores, en términos ideológicos, del continente.

El que su conflicto se prolongase más allá del fin de la Guerra Fría, sumado a la proximidad con el Consenso de Washington, la guerra contra las drogas y la guerra contra el terrorismo global son elementos que considerar (Borda y Tickner, 2011). También hay que considerar la popularidad de las políticas de máxima militarización, como la Política de Seguridad Democrática (PSD) impulsada por Álvaro Uribe (2002-2010). Esta, con todo tipo de excesos, alimentó la posibilidad de una eventual derrota militar de las desacreditadas guerrillas de las FARC-EP y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) (Ríos, 2021).

Buena parte de la literatura más relevante sobre el estudio de la impronta conservadora, *lato sensu*, del sistema político de Colombia se remonta a los constreñimientos electorales e institucionales del Frente Nacional, desde 1958, si no antes (Pécaut, 2011). Tras una guerra civil partidista como fue La Violencia, y dado el alcance parcial de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), las élites liberales y conservadoras fijaron un marco de alternancia gubernamental, inicialmente, por cuatro periodos presidenciales, y que deja a cualquier expresión de izquierda en una posición residual (Higuera *et al.*, 2014). Hay quienes van más allá y confieren la marginación política de la izquierda como resultado de las mayorías *monocolor* conservadoras (1886-1930) y liberales (1930-1946) conformadas previamente (Restrepo, 2017; Restrepo *et al.*, 2021). De acuerdo con Leal y Dávila (1991) y Dávila y Gutiérrez (2000), todos estos procesos desencadenan herencias clientelares entre los partidos tradicionales que perduran hasta bien entrado el siglo *xxi*, permeando unas relaciones entre Estado y ciudadanía profundamente verticales, violentas y erosionadas por notables carencias de legitimidad frente al ejercicio del poder (Oquist, 1978; Pécaut, 2011).

El Partido Liberal y el Partido Conservador, durante todo este tiempo, mantuvieron diferentes facciones y familias internas, proyectándose formalmente como estructuras fuertemente disciplinadas y cohesionadas, que limitaban la transición hacia fórmulas políticas por fuera de los dos partidos hegemónicos (Archila, 1997; Piedrahita, 2011). Como retrata el trabajo de Gutiérrez Sanín (2007), en realidad, estaban dados todos los incentivos para una sucesiva fragmentación en pequeñas facciones. Lo anterior no era tanto por disciplina que estas se mantenían dentro de los partidos, sino porque las reglas para ser liberal o conservador eran tan amplias que cualquiera podía emprender su propia microempresa electoral sin razón alguna para hacerlo por fuera².

La Constitución de 1991, y la posterior Ley de Reforma Política de 2003, formalmente abren un espacio para el multipartidismo, y aun cuando surgen partidos como el Polo Democrático, desde entonces y hasta la actualidad, han seguido predominando los personalismos y las lógicas pactistas entre partidos y familias políticas (Gutiérrez Sanín, 2002; Botero *et al.*, 2018). Más si cabe, por la añadidura de otros elementos como la forma de financiación de campañas, eminentemente privada, el sentido personalista de la confrontación electoral y el trato de favor que se otorga a los partidos tradicionales (Rodríguez-Raga y Botero, 2006).

Un factor añadido guarda relación con la escasa cohesión interna de las incipientes agrupaciones políticas de izquierda que surgen a lo largo de la década de los setenta, incapaces de acumular un mínimo recorrido producto de los personalismos, las desavenencias y las incapacidades para confluir en proyectos transversales (Restrepo *et al.*, 2021). Melo (1978) lo atribuye, también, a la confrontación que transcurre en el escenario geopolítico global entre comunistas afines a la Unión Soviética, a China y a la IV Internacional. Otros como Palacios y Safford (2002) o Palacios (2012) reivindican la importancia que supone la aplicación en Colombia de la Doctrina de Seguridad Nacional, que llega al país con mucha posterioridad frente a la aparición de las guerrillas en los años sesenta. Esta produce una especial forma de militarización de la seguridad y represión para con la protesta social, y a la que se suma el papel de la Iglesia católica y de las élites locales para con la modulación de una cultura política escasamente involucrada en los asuntos públicos (Roldán, 1998, 2010). Este conjunto de factores ayudaría a explicar parte de la razón por la que surgen guerrillas como las FARC-EP, el ELN o el Ejército Popular de Liberación (EPL) (Villamizar, 2017; Ríos, 2021), pero también explicaría la profunda debilidad de los movimientos sociales en Colombia (Pécaut, 2001) y las incapacidades reales de la izquierda partidista (Basset, 2008).

Quedaría mencionar cómo Bergquist (2017: 282) enfatiza la influencia de la estructura económica cafetera y la lucha de sus cultivadores por la propiedad de la tierra. Además, están los continuos procesos de colonización fuera de las zonas cafeteras —y que sirvieron de canal de desfogue a los conflictos sociales—, las oportunidades ofrecidas en muchas de estas zonas para el cultivo de drogas ilícitas, aparte de la rigidez y escasa capacidad de la izquierda para atraer a sectores sociales urbanos, y esencialmente a aquellos pertenecientes a la economía informal (Hylton, 2014). Esto, sin olvidar el factor de desestructuración que supuso la violencia producida en los años cuarenta y cincuenta, en relación con la construcción del campesinado como actor político a considerar (Sánchez, 1989).

Junto con la discusión teórica sobre el sistema político colombiano, es necesario añadir algunos aspectos relacionados con el discurso político, que es nuclear para este trabajo. El hecho de que con los relatos de personalidades políticas con diferentes posiciones, planteamientos y militancias partidistas de izquierda en Colombia se analicen los condicionantes que limitaron el acceso al poder gubernamental de la izquierda partidista plantea algunas cuestiones teóricas a considerar. Esto es así porque sus narrativas están cargadas de ideología, en tanto que son “mapas de una realidad social problemática, así como matrices para crear una conciencia colectiva” (Geertz, 1987: 178).

Así, el discurso y sus relatos han de entenderse como un instrumento que define y oscurece categorías sociales, que estabiliza o perturba expectativas, que mantiene o socava normas, que fortalece o debilita el consenso y que alivia o exacerba las tensiones al interior de la sociedad (Ariño, 1997; Van Dijk, 2005). Igualmente, construye las creencias sobre aliados y enemigos políticos, la manera de gestionar el sentido de la

² Esta argumento, revelador y perfectamente formulado, está recogido íntegramente de uno de los evaluadores del texto.

participación, los diversos grados de legitimación del sistema, las lecturas reconstructivas del pasado y sus proyecciones hacia el futuro, además de una definición recíproca de subjetividad.

3. Aspectos metodológicos

A partir de criterios de pluralidad, relevancia y saturación, el análisis gravita en torno a testimonios de personalidades de referencia para la izquierda partidista colombiana actual. Se asume de partida una perspectiva de la política como acción institucional, excluyéndose el relato de la izquierda proveniente de los movimientos sociales y de la que decide participar a través de la lucha armada. Los límites son grises, pues se incorporan en el trabajo las narrativas provenientes de Comunes, el partido heredero de las extintas FARC-EP, aunque predomina un planteamiento metodológico y analítico ceñido al discurso de la izquierda en cuanto a su dimensión político-electoral. Un aspecto limitado que, en cualquier caso, espera ser enriquecido en el futuro, incorporando el análisis discursivo del resto de expresiones políticas de izquierda en Colombia.

Entre los entrevistados hay una alta pluralidad de expresiones progresistas, que comprenden posiciones social-liberales (Ernesto Samper), posiciones que han involucionado hacia planteamientos críticos con la izquierda (Angelino Garzón), además de militancias partidistas tradicionales y destacadas, como Piedad Córdoba, Carlos Bula, Iván Cepeda o Clara López, muy disímiles entre sí. Por otro lado, se han integrado personalidades políticas que provienen del conflicto armado, como es el caso de Antonio Navarro Wolff (excomandante del M-19) o de *Timochenko* y Sandra Ramírez, hoy en Comunes y exintegrantes de las FARC-EP (ver Tabla 1). En total son nueve los entrevistados que, aunque no conforman un universo semántico común, sí comparten un marco de referencia respecto a muchas de las cuestiones que históricamente han lastrado el acceso de la izquierda al poder nacional.

Tabla 1. Relación de entrevistados

Ernesto Samper	Presidente de la República de Colombia (1994-1998) Secretario general de UNASUR (2014-2017)
Angelino Garzón	Vicepresidente de la República de Colombia (2010-2014) Ministro de Trabajo (2000-2002)
Antonio Navarro	Comandante de la guerrilla M-19 (1974-1990) Candidato presidencial (1990, 1994) Senador de la República (2002-2006; 2014-2018)
Clara López	Candidata presidencial (2014) Ministra de Trabajo (2016-2017) Senadora de la República (2022-2026)
Piedad Córdoba	Senadora de la República (1994-2010; 2022-2026)
Iván Cepeda	Senador de la República (2014-2026)
Carlos Bula	Ministro de Trabajo (1998)
Rodrigo Londoño, <i>Timochenko</i>	Comandante jefe de las FARC-EP (2011-2017) Presidente del partido Comunes (2017-2022)
Sandra Ramírez Lobo Silva	Senadora de la República (2018-2026)

Fuente: elaboración propia.

Las entrevistas fueron abiertas, preguntando, sin mediaciones previas para los entrevistados, sobre qué factores intervinientes y qué principales dificultades habían influido en que, hasta 2022, la izquierda nunca hubiera llegado a la presidencia del país. Con sus respuestas se identifican tres acontecimientos básicos, compartidos en la formulación, aunque no siempre en el análisis: 1) el punto de inflexión frustrado de la Constitución de 1991 por la asunción de un modelo neoliberal; 2) el impacto que para la izquierda partidista implicó el conflicto armado y su afectación por las guerrillas, el paramilitarismo y una respuesta estatal profundamente militarizada; 3) el carácter clientelar de la democracia colombiana, acompañada por el personalismo político y el anclaje de los partidos tradicionales. Además, todos los entrevistados, en el desarrollo de las conversaciones, incorporaron o mencionaron un aspecto adicional: el acuerdo de paz suscrito con las FARC-EP en noviembre de 2016.

Con el programa ATLAS.ti 2022 se trató de profundizar en el sentido de las respuestas, mediante la identificación de las palabras clave que tuvieran un peso específico en el conjunto de aquellas. Se identificaron hasta 15 elementos desde los que se sustantiva el grueso de las narrativas de los entrevistados, aunque no todos ellos aparecen con la misma intensidad y relevancia. Empero, estos 15 factores, recogidos en la Tabla 2, y sobre la base de los acontecimientos ya mencionados, sí que son los que más fuerza y más repetición atesoran en la mayor parte de los entrevistados.

Todas las entrevistas duraron entre 60 y 120 minutos y transcurrieron en la ciudad de Bogotá, a partir de un trabajo de campo realizado entre octubre y diciembre de 2021. Todos dieron su consentimiento expreso para que sus relatos fueran incorporados a este trabajo.

Tabla 2. Acontecimientos y factores del análisis discurso

Acontecimientos	Factores
Constitución de 1991	Éxito electoral del M-19 Ampliación del Estado social en Colombia Desnaturalización por modelo neoliberal
Conflicto armado	Genocidio de la UP Exterminio sistemático de la izquierda Desnaturalización de las guerrillas Reacción paramilitar Militarización de la seguridad
Democracia colombiana	Corrupción Clientelismo Cultura política Fragmentación de la izquierda
Acuerdo de paz con las FARC-EP	Nueva movilización social Liberación de espacio para la izquierda Confluencia del progresismo

Fuente: elaboración propia.

4. Origen y evolución de la izquierda democrática en Colombia

Los orígenes de la izquierda partidista en Colombia se remontan a los años veinte. En 1926 tiene lugar la creación del Partido Socialista Revolucionario (PSR), el cual incorporó una importante tradición campesina, aunque su ciclo de vida duró hasta 1930, dado el fracaso en la movilización de la huelga de Las Bananeras, en 1928, y las fracturas y divisiones ocasionadas tras esta. En julio de 1930 es rebautizado como Partido Comunista de Colombia (PCC) y asume un proceso de *bolchevización* que implica el abandono de algunos de sus líderes más reconocidos, como María Cano o Tomás Uribe. Este PCC, en realidad, fue la referencia de la reducida izquierda ideológica colombiana, especialmente, durante los años treinta y cuarenta, pero con una influencia marginal en el sistema político nacional y, en muchas ocasiones, con gran proximidad al Partido Liberal (Melo, 2017). En todo caso, ilegalizado este bajo la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1958), la mayor sensibilidad progresista de los años sesenta recae en el proyecto político de la Asamblea Nacional Popular (Anapo), creada en 1961 para concurrir en las elecciones presidenciales de 1970 que debían elegir un gobierno conservador (Pécaut, 2017). Esta Anapo, paradójicamente, estaba dirigida por el otrora dictador Rojas y se dotaba de elementos nacionales y populares en la producción de su discurso, aunque más que una alternativa de izquierda era una opción tercerista frente al bipartidismo cerrado del Frente Nacional. Aun cuando perdió mucha fuerza en los años sucesivos, en aquellas elecciones llegó a obtener casi el 40% de los votos.

En los comicios legislativos de 1972 concurren las primeras expresiones partidistas de la izquierda colombiana, tal y como sucede con el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR) y el Frente Popular Colombiano. Estos, junto al anteriormente mencionado PCC, llegan a sumar casi 800.000 votos. De una escisión de la Anapo, llamada Movimiento Amplio Colombiano (MAC), ese mismo 1972 se fragua una alianza que conforman este MAC, el MOIR y el PCC. El resultado es la Unión Nacional de Oposición (UNO), que no fue más que un intento de frente amplio, de orientación popular y progresista, que buscaba concurrir a las elecciones presidenciales de 1974, que ganó el liberal Alfonso López Michelsen (Acevedo *et al.*, 2019). Esta plataforma obtuvo un resultado de casi el 3% de los votos, pero quedó rápidamente disuelta apenas un año después. Fue sustituida por el Frente por la Unidad del Pueblo, impulsado por el MOIR y el MAC, aunque con una relevancia poco destacada, que le llevaría a la desaparición en la década de los ochenta.

Hay que esperar a las postrimerías del siglo xx, en 1999, para volver a encontrar una apuesta plural de parte de diferentes formaciones de izquierda. Hasta ese momento, y en especial, tras la Constitución de 1991 y la posterior Ley de Partidos de 1994, la referencia para la izquierda colombiana, de más a menos, había sido la Alianza Democrática M-19 (AD M-19), heredera de la guerrilla desmovilizada en 1990. Uno de sus más destacados integrantes, Luis Eduardo *Lucho* Garzón, planteó la creación del Frente Social y Político (FSP), como intento de aglutinar todas las sensibilidades de izquierda, y a pesar de la renuencia de formaciones como el MOIR. Su participación electoral en las elecciones legislativas de 2002, no sin dificultades, se tradujo en un buen resultado, al obtener un senador (Carlos Gaviria) y dos representantes a la Cámara (Alexander López y

Wilson Borja). Garzón se lanzaría como candidato presidencial, avalado por la coalición Polo Democrático, que era un punto de encuentro de casi todas las agrupaciones de izquierda, profundamente atomizadas — Alianza Social Indígena, Anapo, FSP, Partido Socialdemócrata Colombiano, Partido Socialismo Democrático, Unidad Democrática y Vía Alterna— a excepción del MOIR (Restrepo *et al.*, 2021).

En 2003, un año después de las elecciones presidenciales en las que Garzón obtiene algo más de 680.000 votos, se producen importantes disensiones internas entre quienes proponían una oposición absoluta al primer Gobierno de Álvaro Uribe, liderados por Carlos Gaviria, y quienes aceptaban algunos de los postulados sobre los que se constituía la PSD, dirigidos por Antonio Navarro. Tal es el grado de disenso, que se terminan constituyendo dos nuevas formaciones políticas: el Polo Democrático Independiente (PDI), creado en julio de 2003, y Alternativa Democrática (AD), surgida en noviembre de 2004. Uno y otro proyecto quedaban encabezados, respectivamente, por Navarro y Gaviria (Sandoval, 2006).

Desde ese momento se suceden algunas reformas políticas. A efectos de intentar reducir la creciente atomización partidista, se fija un umbral electoral del 2%, al que se sumaba la prohibición de la doble militancia, la regla de la lista única y el fortalecimiento de las bancadas frente al personalismo. Esto, como sugiere Daza (2020: 24), suponía que “la amplia y creciente división partidista *transitase* del bipartidismo con fragmentación interna a un multipartidismo producto de fusiones y divisiones”. Sobre la base de estas circunstancias, y dada la convocatoria de elecciones en 2006, la estrategia que se adopta desde las plataformas de izquierda es la de buscar un punto de encuentro que permita un cierto nivel de unidad. Producto de lo anterior se crea, el 1 de diciembre de 2005, el Polo Democrático Alternativo (PDA), que pasa a unir, nuevamente, a Carlos Gaviria y Antonio Navarro. No obstante, y tras casi un año de negociaciones, se acabarían consensuando los puntos de partida entre AD y PDI: unidad programática y organizativa, y de listas y candidatura presidencial (Restrepo *et al.*, 2021).

El PDA puede entenderse como el mayor esfuerzo integrador que, hasta ese momento, habían llevado a cabo la(s) izquierda(s) colombianas. Allí estaba gran parte de las formaciones progresistas existentes en el país, además de otro tipo de movimientos y plataformas representativas de los diferentes pueblos étnicos, movimientos juveniles o LGTBI. En las elecciones de 2006 se obtuvo un resultado positivo, aun cuando Álvaro Uribe venció en primera vuelta con un respaldo mayoritario. Primero, en las elecciones legislativas, el PDA consigue la quinta posición, con casi un 10% de los votos de una lista encabezada por Gustavo Petro. Este fue el segundo senador más votado, y a él se sumaron 18 parlamentarios más. En las presidenciales, Carlos Gaviria fue el segundo candidato, con más de 2.600.000 votos, lo que invitaba a pensar en un punto de inflexión para el sistema de partidos colombiano (Posada-Carbó, 2006).

A pesar de lo anterior, en 2007 nuevamente aparecen las tensiones internas entre el sector que encabeza Carlos Gaviria, junto a Jorge Enrique Robledo, y en el que se encuentran Gustavo Petro y *Lucho* Garzón. La definición de las candidaturas a la alcaldía de Bogotá, sumado a otros elementos de estrategia electoral, van consolidando las posiciones enfrentadas. El asesinato, tras cinco años de cautiverio, de 11 de los 12 diputados de la Asamblea de Valle del Cauca, que habían sido secuestrados por las FARC-EP en abril de 2002, agrava las tensiones al interior del PDA, entre quienes mantienen un discurso abierto al diálogo, como Carlos Gaviria, y los que reclaman posiciones de mayor confrontación, como Antonio Navarro. Tampoco se puede pasar por alto la inestabilidad causada en la alcaldía de Bogotá por parte del progresista Samuel Moreno. Este, inicialmente respaldado por Gustavo Petro —aunque poco tiempo después sería su contradictor—, venció en los comicios de octubre de 2007, con más de un 40% de los votos. Sin embargo, su popularidad decreciente y un escándalo de irregularidades y corrupción en la construcción del sistema de transporte masivo, Transmilenio, sumió en una profunda crisis de legitimidad al PDA, lo cual terminó con la expulsión de Moreno en septiembre de 2011.

Esta división se mantuvo con altibajos hasta el año electoral de 2010. Entonces, la estrategia electoral que se impone es la de la transversalidad, con miras hacia el Partido Liberal, como reclamaba Gustavo Petro. Este será el candidato presidencial, siendo su vicepresidenta Clara López, que era la apuesta de la posición más a la izquierda del PDA y que avalaba Carlos Gaviria. Los resultados electorales no son positivos, a pesar de que Gustavo Petro obtiene un millón y medio de votos. Esto no será suficiente para que presida el partido, y en las elecciones que debían decidir la dirección nacional del PDA se impone Clara López, con 25 votos a favor y 7 en contra. Esta situación representa para Petro un punto de no retorno que consuma su abandono de la formación política y la creación de un nuevo partido: Progresistas. Con él concurre a las elecciones por la alcaldía de Bogotá, en noviembre de 2011, en donde vence al lograr una tercera parte del voto.

Por tanto, desde 2010 el PDA experimenta un importante marco de disputa electoral, que desdibuja su preeminencia como la formación política de referencia para la izquierda. No solo por la irrupción de Petro, sino por la aparición de un partido verde (Alianza Verde) creado en octubre de 2009, y que atrae a destacados miembros del PDA como *Lucho* Garzón, Antonio Navarro, Guillermo Asprilla o Angélica Lozano. Este partido verde será el que alcance la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2010, con la candidatura de Antanas Mockus.

Entre 2010 y 2014 continúan las formaciones políticas a ambos lados del PDA que restan apoyos electorales al partido, hasta el punto de que la Alianza Verde, en la que durante algunos años se integró Progresistas, logra mejores resultados en las elecciones legislativas de 2010. Una realidad que, de algún modo, se matizó tras

las elecciones presidenciales, en donde la candidata Clara López, en un viraje hacia la izquierda y en coalición con la Unión Patriótica, consigue el doble de votos que el candidato de la Alianza Verde, Enrique Peñalosa, con casi dos millones de apoyos y un respaldo de algo más del 15% del electorado.

Desde entonces, Gustavo Petro se ha ido conformando como el candidato más importante de la izquierda, especialmente una vez que redefine Progresistas a través de Colombia Humana. Con esta formación compite en las elecciones de 2018 para ser segunda fuerza en las presidenciales y alcanzar un 42% de los votos en la segunda vuelta, siendo la primera vez en la historia en la que se superan los ocho millones de votos (Pizarro, 2018). Esta notoriedad se ha mantenido bajo la presidencia de Iván Duque, vencedor en aquella contienda electoral, y en 2022 Colombia Humana se integra en la coalición del Pacto Histórico Nacional para ser la formación con más representación en el Senado de la República. Asimismo, y gracias a su victoria en segunda vuelta, en junio de 2022, Petro se erige como el primer candidato de izquierda en llegar a la presidencia de Colombia.

5. Las dificultades provenientes del modelo constitucional

Colombia, tras un convulso siglo XIX, similar al de otros países de su entorno, copado de guerras civiles, modelos enfrentados de gobierno y sucesivos órdenes constitucionales (Guedán y Ramírez, 2005), concluye la centuria con el modelo constitucional de 1886. Este se caracteriza por un espíritu profundamente conservador, presidencialista, católico, aparte de un notable sentido unitario de país que, de algún modo, conecta con la guerra civil de 1895 y la Guerra de los Mil Días.

El siglo XX colombiano, prácticamente durante toda su vigencia, mantuvo esta Constitución con reformas muy puntuales. Bajo una primera mayoría conservadora (1886-1930), y una seguida hegemonía liberal (1930-1946), terminó asentándose un bipartidismo perfecto entre Partido Liberal y Partido Conservador. Ello ocurrió desde una democracia formal muy restrictiva en sus fundamentos y que imposibilita expresiones partidistas por fuera de los dos partidos dominantes, tal y como sucede con el PCC, ilegalizado bajo la breve dictadura de Gustavo Rojas Pinilla.

A estos antecedentes se añade un conflicto armado que desde mediados de los sesenta involucra a varias guerrillas —FARC-EP, ELN, EPL—, a las que se fueron sumando diferentes estructuras paramilitares, nuevas insurgencias como el M-19 o la guerrilla indigenista Quintín Lame (GIQL) y los cárteles de la droga. Así era de esperar una pronta extemporaneidad en las respuestas que la norma suprema ofrecía a la intrincada realidad colombiana de finales del siglo XX.

La llegada de la nueva Constitución de 1991 se concibe como un punto de inflexión desde el que modernizar el país. El fin de la Guerra Fría impregna un halo de transformación que, en Colombia, coincide con la desmovilización de varios grupos armados, como M-19, EPL, Autodefensa Obrera (ADO), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) o GIQL. Igualmente, en el continente se sucede una ola de reformas constitucionales en aras del fortalecimiento democrático y la consolidación de nuevos derechos sociales y culturales, como acontece en Brasil (1988), Paraguay (1992), Perú (1993), Bolivia (1994), Ecuador (1998) o Venezuela (1999).

En el caso de Colombia, la nueva Constitución aparece como un instrumento normativo de vanguardia, que formalmente incorpora elementos muy destacados desde los que modernizar el Estado colombiano y adaptar sus derechos, libertades y garantías a los de una sociedad en la antesala del nuevo milenio. Se blindó constitucionalmente la dimensión social del Estado de derecho colombiano y se reconoce su naturaleza descentralizadora, en términos administrativos, aunque dentro de un modelo unitario que hereda del régimen anterior un marcado presidencialismo (Rodríguez-Villabona, 2021). Se promueve la dimensión multicultural de la sociedad colombiana, en favor de reconocer y proteger los derechos de minorías étnicas indígenas, afrodescendientes, palenqueras y rom. Se pone fin a la profesión católica del Estado, en favor de un modelo de aconfesionalidad y se fortalece profundamente la dimensión jurídico-garantista del Estado de derecho, al crearse la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. Además, aparecieron varios mecanismos de protección de los derechos de la ciudadanía frente a agresiones de terceros, como es el caso de la acción de tutela, el derecho de petición o el derecho de consulta previa, garantizados por la Defensoría del Pueblo.

En el relato de todos los entrevistados, este es un aspecto que se entiende, aunque con matices y diferencias, como explicativo de las dificultades de la izquierda para acceder al poder político gubernamental. Aun cuando se reconocen aspectos positivos en el texto constitucional, casi es común la identificación de un trasfondo neoliberal que repercute muy negativamente en la izquierda, como dan cuenta los entrevistados Iván Cepeda o Piedad Córdoba:

La Constitución de 1991 marca un hito porque abre un proceso de cambio y fisura de un régimen constitucional autoritario y antidemocrático. La Constitución introdujo, aunque fuese de forma enunciativa, algunos presupuestos esenciales para democratizar la sociedad [...]. Esa Constitución fijaba la exigibilidad de derechos, pero su trasfondo era el de una ideología liberal. (Entrevista con Iván Cepeda, Bogotá, noviembre de 2021).

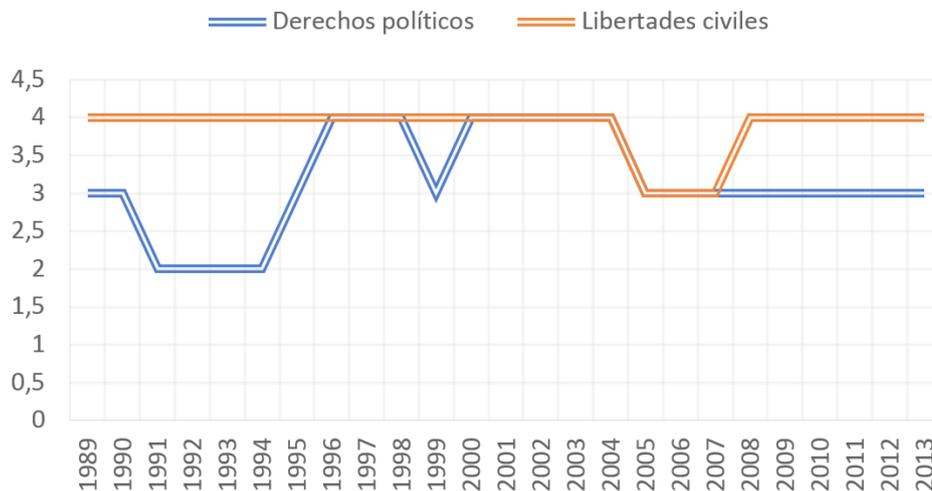
El cambio político de 1991 tuvo efectos ambiguos. De entrada, definiendo la apuesta por una apertura democrática, ante una Constitución anacrónica como la de 1886 [...]. Valoro de esa Constitución la figura de la acción

de tutela, el reconocimiento a los pueblos étnicos y otros espacios para sectores democráticos, pero el *paquetazo* neoliberal de Gaviria le quitó todo sustento al movimiento sindical, lo cual debilitó a la izquierda colombiana. (Entrevista con Piedad Córdoba, Bogotá, noviembre de 2021).

La transformación de la realidad política y social esperada parece quedar imposibilitada por el modelo económico aperturista que tiene lugar al mismo tiempo. Si se realiza un análisis en retrospectiva, en lo que a aspectos sociales se refiere, Colombia, con el paso del tiempo, no va a exhibir transformaciones profundas con las que superar sus profundas dificultades estructurales. Sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo, con un coeficiente de Gini en relación con la distribución del ingreso de 0.51 (CEPAL, 2021), y que se eleva a 0.85 en cuanto a la propiedad de la tierra (CEPAL, 2021). El umbral de pobreza, aunque se ha ido corrigiendo, también por el cambio de los medidores, ha mantenido umbrales estables, próximos al 40% (DANE, 2021). Estos aspectos son especialmente significativos para las poblaciones vulnerables pertenecientes a minorías étnicas o colectivos afectados por la violencia armada, como sucede en la región Caribe o el litoral Pacífico.

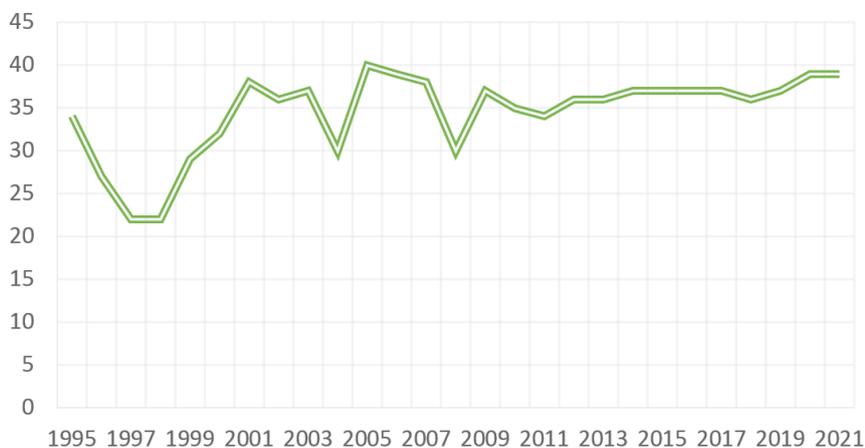
La calidad de la democracia o la percepción de la ciudadanía sobre la corrupción tampoco se dotan de mejores resultados (Ver Gráficos 1 y 2). Si bien, como se verá con posterioridad, el conflicto armado ha incidido directamente en el normal funcionamiento de la democracia colombiana, tanto por la afectación de la violencia directa ejercida por los grupos armados, como por las políticas militaristas que han tenido lugar, los derechos civiles y las libertades políticas, más allá del efecto luna de miel que supuso la aprobación de la Constitución de 1991, no parecen haber mejorado con el paso del tiempo.

Gráfico 1. Evolución de la calidad de los derechos civiles y libertades políticas en Colombia (1989-2013)



Fuente: elaboración propia con base en Freedom House.

Gráfico 2. Evolución del índice de percepción de la corrupción en Colombia (1995-2021)



Fuente: elaboración propia con base en Transparencia Internacional.

A lo anterior se añade la escasa transformación territorial de un modelo descentralizado administrativamente, pero en el que las diferentes reformas tributarias gravitan sobre la centralidad de los recursos, la ausencia

de autonomía en el gasto y la condicionalidad del nivel central sobre los niveles subnacionales (Federación Nacional de Departamentos, 2012). De otro lado, y sobre este contexto, los movimientos sociales se han visto relegados en sus capacidades de interlocución y transformación de la sociedad. Ello es producto también del protagonismo de los agentes de la violencia, y no se puede desligar de las transformaciones de orden político, bien por la violencia desplegada sobre estos por el paramilitarismo —especialmente entre 1993 y 2006—, o porque las guerrillas se erigieron a sí mismas como los únicos interlocutores válidos frente al Estado. Además, subyace una falta de madurez en una movilización social atomizada, desarticulada y anárquica, a la vez que fácilmente cooptada por los actores gubernamentales (Pécaut, 2017).

Gaviria no nos escuchó. Nos ofreció cuatro curules para que estuviésemos en la Asamblea Nacional Constituyente ¡Para que nos entregáramos solo por cuatro curules! (...) Nosotros valorábamos esa Constituyente porque produjo la Constitución de 1991 que hoy nos rige, y que contempla importantes avances en un Estado social y de derecho, pero que están en letra muerta. César Gaviria tenía el lema de “Bienvenidos al futuro”, pero también trajo la guerra integral, abrió las puertas al mercado con la apertura económica y trajo más pobreza y políticas neoliberales³. (Entrevista con Sandra Ramírez, Bogotá, octubre de 2021).

Por ello, el elemento que más debilita a la Constitución de 1991 guarda relación con la naciente impronta liberalizadora, aperturista y próxima al código geopolítico de Estados Unidos y el Consenso de Washington. Desde 1990, privatización, desregulación, disciplina fiscal, control del déficit y contención del gasto público se suman a un modelo tributario altamente afectado por la informalidad, el subempleo, la baja remuneración, la escasa capacidad recaudatoria y la regresión fiscal, que no son revertidos por el nuevo texto constitucional, como dan cuenta los siguientes testimonios⁴:

La Constitución de 1991 impuso no solo un modelo económico neoliberal, sino un modelo político, de gobernanza, que ha fracasado en todo el mundo. Un Estado mínimo, privatizado, próximo a Estados Unidos por el narcotráfico y la lucha antisubversiva. Eso justificaba una violencia y un estigma que impidió el surgimiento verdadero de una izquierda. (Entrevista con Clara López).

La Constitución de 1991 es ambivalente. Es un Constitución garantista, que permite la seguridad de muchos derechos de los ciudadanos, ampliando el espectro de las garantías democráticas, pero a la vez le abrió espacios a toda una formulación neoliberal desde el punto de vista económico y que condujo al retroceso de las fuerzas progresistas. (Entrevista con Carlos Bula, Bogotá, octubre de 2021).

Aunque es un lugar común entre los entrevistados señalar la ambivalencia que supone la Constitución de 1991, en términos sociopolíticos y económicos, debe apuntarse que dicha consideración no es extensible a la totalidad de las voces analizadas. Entre los relatos obtenidos se aprecia una mayor discrepancia entre las posiciones más conservadoras que, a su vez, son las que alcanzaron mayores niveles de responsabilidad gubernamental —nacional y subnacional—. Antonio Navarro, Ernesto Samper o Angelino Garzón cuestionan el sesgo neoliberal del texto constitucional, asumiendo que, de los tres factores, este es el que pudo tener menor afectación directa en cuanto a limitar posibilidades electorales dentro de la izquierda.

Más que la Constitución del 91, los liberales son los gobiernos. Eso marca distancias ideológicas, aunque no se traduzca en enfrentamientos abiertos. El ejemplo es el Partido Liberal. Yo coincidí totalmente con Gaviria o Santos en el tema de la paz, los derechos humanos o los derechos reproductivos, pero con los dos tengo una diferencia de fondo sobre el modelo neoliberal. La Constitución de 1991 en eso no tomó partido. (Entrevista con Ernesto Samper, Bogotá, octubre de 2021).

La Constitución de 1991 no es neoliberal de ninguna manera, es neutra. Permite elegir un modelo u otro dependiendo de quien gane las elecciones. Su problema fue otro, pensar que podíamos ganar con unas listas abiertas al Congreso y sin intervenir sobre el intercambio de favores clientelistas. (Entrevista con Antonio Navarro, Bogotá, noviembre de 2021).

6. Las dificultades producidas por el conflicto armado interno

Conectando con parte del argumento anterior, y aunque ya se han adelantado algunos elementos, varios autores reconocen que el surgimiento de las guerrillas deriva de la imposibilidad de la izquierda colombiana por participar de las normas democráticas (Ríos, 2021). A esto se suman otros factores como la profunda e irresoluta

³ El reclamo de la guerrilla frente a la Asamblea Nacional Constituyente fue el de solicitar la mitad de sus 70 curules, lo cual imposibilitaba de plano cualquier atisbo de acuerdo.

⁴ El dogma neoliberal tuvo en los noventa una clara asunción regional, aunque su agotamiento rápido permitió la eclosión de un ciclo progresista a inicios de los dos mil. Colombia es una salvedad por la yuxtaposición de factores, analizados con posterioridad, como el conflicto armado y las particularidades de su sistema político-partidista.

violencia estructural o la erosión y falta de legitimidad del Estado colombiano. Aun cuando desde comienzos de los ochenta inician los primeros intentos por abrir escenarios de diálogo político con la guerrilla (Pizarro, 2017), como sucedió con la presidencia del conservador Belisario Betancur (1982-1986), a través de los acuerdos de La Uribe y Corinto (1984) con las FARC-EP y el M-19, respectivamente, se vislumbra la fuerza de los opositores a cualquier atisbo de normalización democrática.

Tales diálogos, además de reconocer por primera vez la condición política de las guerrillas, implicaban la aceptación de factores estructurales que, más allá de aspectos individuales, daban explicación a la existencia de grupos insurreccionales. Junto a reconocer espacios formales de interlocución, el Gobierno instó a un cese de las hostilidades que, en realidad, nunca se materializó ni por parte de las guerrillas, ni de las Fuerzas Militares. Estas últimas eran muy distantes a la figura de Betancur, como se evidenciaría tras la ocupación del M-19 de la Corte Suprema de Justicia, en noviembre de 1985.

La aparición de saboteadores a una eventual desaparición negociada de las guerrillas termina por impulsar una espiral de violencia política dirigida hacia la Unión Patriótica (UP). Este era un partido de izquierda que debía motivar la desaparición de las FARC-EP tras los Acuerdos de La Uribe, y permitir así su transformación político-democrática. Tal cuestión nunca sucedió, y este partido, desligado de la violencia, fue objeto del accionar paramilitar, en connivencia, en muchas ocasiones, con la fuerza pública (Gómez-Suárez, 2013). En realidad, la eventual desaparición de las guerrillas obligaba la desaparición de un proyecto paramilitar en ciernes que ya se erigía como un negocio criminal en departamentos como Antioquia, Santander o buena parte de la región Caribe (Ronderos, 2014).

Este hecho supuso la desaparición de toda una generación de militantes y líderes políticos progresistas. La cifra se eleva, según los datos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, 2022) a 5.733 muertes violentas, entre las que destacan los asesinatos violentos de 2 candidatos presidenciales, 5 congresistas, 11 diputados, más de 100 concejales y 16 alcaldes y exalcaldes, aparte de miles de militantes.

No se puede pasar por alto el haber perdido una generación completa de ciudadanos de izquierda por la violencia de los años ochenta y el genocidio de la Unión Patriótica y el asesinato de sus dirigentes, pero también de dirigentes sindicales y hasta curas de la teología de la liberación. Eso generó dispersión y reducción del número de dirigentes. Cuando se reduce el número de los que mandan y hay persecución, hay, a la vez, una exacerbación de egos y caudillismos que ha impedido la unificación de un único proyecto político. (Entrevista con Clara López, Bogotá, octubre de 2021).

La violencia regó todo. El genocidio de la Unión Patriótica. Nosotros le decíamos el baile rojo. Asesinatos y exilios por 25 años por culpa de las posiciones guerrilleras de la oligarquía colombiana y la idea de que había un enemigo interno que matarlo, asesinarlo o eliminarlo. (Entrevista con Sandra Ramírez, Bogotá, octubre de 2021).

El buen resultado electoral que obtuvo la UP en las elecciones de 1986, liderada por Jaime Pardo Leal, parecía abrir una tercera posibilidad frente a Partido Liberal y Partido Conservador, toda vez que contribuyó a un endurecimiento de la violencia, especialmente, entre 1987 y 1990, y que entre otras muchas se cobra la vida del propio Pardo Leal. Una violencia que, además del escalamiento del activismo guerrillero, igualmente, incorpora otros protagonistas como el paramilitarismo y los carteles narcotraficantes.

Aun cuando el trasfondo del conflicto es el de un Estado profundamente debilitado por el narcotráfico, la corrupción y su precariedad institucional, en 1990 se produce un hecho inesperado como es la desmovilización del M-19, y a lo que se suman después otras guerrillas como EPL, PRT, ADO y GIQL. Además, el PCC rompe su relación con las FARC-EP y renuncia a la proclama de la combinación de todas las formas de lucha, lo cual, simbólicamente, repercute negativamente en el significado político de la guerrilla. Este conjunto de acontecimientos ofrece una gran popularidad a líderes políticos de la izquierda colombiana, como es el caso de Carlos Pizarro (excomandante del M-19) o Bernardo Jaramillo (candidato presidencial de la UP), pero que terminan asesinados por el paramilitarismo en el marco de las elecciones presidenciales de 1990.

Bajo esta vorágine de violencia, el nuevo momento que acontece con la nueva presidencia de César Gaviria tiene como horizonte inmediato la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente que apruebe la nueva Constitución. En las elecciones que deben conformar la misma, la AD M-19, encabezada por Antonio Navarro, logra la segunda mayor votación, solo superada por el Partido Liberal, lo que conecta con el buen resultado electoral en los comicios presidenciales del año anterior, en donde Navarro queda en tercera posición con más de 700.000 votos.

Hubo un momento en que, como M-19, tuvimos mucho apoyo, en 1980-81. Cuando tomamos la embajada de la República Dominicana nos decían “¡muy bien muchachos!”. Nos daban una palmadita y nosotros decíamos, “venga, acompañen”. Pero no, el alzamiento armado era otra cosa. Nunca los colombianos acompañaron eso y el conflicto fue un lastre para las transformaciones democráticas del país. (Entrevista con Antonio Navarro, Bogotá, noviembre de 2021).

A pesar de la situación expuesta, el conflicto armado continúa socavando las posibilidades reales de una transformación democrática favorable para la izquierda. El paramilitarismo se consolida como proyecto polí-

tico y criminal en Antioquia, Santander y la región Caribe, siendo el departamento de Córdoba su centro nuclear. Además, sale fortalecido por la desaparición del cártel de Medellín (1993) y Cali (1996), y por el halo de legalidad⁵ e impunidad que acompaña a dicho paramilitarismo (Romero, 2003). Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), aparecidas en 1993 y rebautizadas en 1997 como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se erigen como el principal actor contras las guerrillas y, por extensión, frente a cualquier atisbo de reivindicación social a través de muertes selectivas, desplazamiento forzado, despojo de tierras y violencia sistemática contra la población civil (Romero, 2002). Las formas de afectación al normal funcionamiento de la democracia, desde la violencia paramilitar, se proyectan en forma de asesinato sobre potenciales políticos de izquierda del nivel nacional, regional y local, aparte de sobre otras figuras como sindicalistas, activistas, ambientalistas, líderes de comunidades étnicas, profesores de la enseñanza pública, periodistas y cualquier voz, en esencia, que pueda visibilizar el verdadero significado político y violento que entraña el paramilitarismo.

Este profundo poder territorial y militar termina desembocando en un proyecto político conocido como la parapolítica, descubierto en 2006, por el que las opciones partidistas de cientos de candidatos afines al paramilitarismo habrían vencido en emplazamientos en donde la democracia resultó secuestrada por la intimidación de las AUC, tanto en el Senado y la Cámara de Representantes, como en gobernaciones y alcaldías (Ríos, 2017). En relación con esto, el exvicepresidente Angelino Garzón apuntaba lo siguiente:

La existencia de guerrillas no ha servido sino para consolidar una extremada derecha irracional. No se puede jugar al mismo tiempo a la democracia y a la guerra, y la combinación de todas las formas de lucha durante décadas fue fatal para la izquierda colombiana. Aparte, otra cosa fatal sería el impacto del fenómeno paramilitar y los sectores políticos de extrema derecha, que confunden la izquierda legal con grupos armados ilegales, y que ha contribuido a una tragedia de muerte y destrucción de muchos sectores sociales del pueblo colombiano. (Entrevista con Angelino Garzón, Bogotá, octubre de 2021).

Por otra parte, desde comienzos de los noventa, las FARC-EP y el ELN escaparon a cualquier solución negociada. Entre 1990 y 2002 incrementan muy sustancialmente sus capacidades operativas y territoriales, de modo que las FARC-EP, en el año 2000, llegan a su máximo histórico de 18.000 efectivos con presencia en más 300 municipios (Pécaut, 2006b; Ríos, 2021). El ELN asciende a 5.500 integrantes ubicados a lo largo de más de 150 municipios. Bajo tales circunstancias ambos grupos comparten una posición renuente a negociar y, todo lo contrario, sus acciones ganan impacto y relevancia, a la vez que empeora su popularidad en la población colombiana por las continuas tomas de municipios y acciones de sabotaje o extorsión. Entre finales de los noventa e inicios de los dos mil tienen lugar importantes acciones como la masacre de Bojayá (2002), o el mencionado asesinato colectivo a 11 disputados de la Asamblea del Valle del Cauca (2007). No obstante, en buena medida, es revelador el posicionamiento acrítico de las extintas FARC-EP, que legitiman la opción de las armas sin sentirse responsables de su afectación a la izquierda formal. Incluso, aceptan que la evolución natural de la violencia es la convergencia, antes o después, con las estructuras partidistas de izquierda, como reconoce Sandra Ramírez:

¿Cómo veíamos las FARC a la izquierda? En su momento lo veíamos como nuestros aliados estratégicos. El M-19 fue por ese camino, se lo respetamos, pero el escenario de asesinatos, amenazas, exilio y desapariciones no cambió. Siempre vimos a la izquierda como aliados estratégicos que van por diferentes caminos, pero que al final nos iremos a encontrar. Recuerde que también nos deslindamos del PCC porque ellos iban por el camino electoral y nosotros por uno diferente. Sabíamos que más adelante nos encontraríamos [...]. Y hoy todos hacemos parte del Pacto Histórico. (Entrevista con Sandra Ramírez, Bogotá, octubre de 2021).

Producto de una sucesión de victorias militares de las FARC-EP sobre la fuerza pública colombiana que transcurren entre 1996 y 1998 (Echandía, 1999), las ideas de Estado fallido y narcoestado ganan fuerza en Colombia (Mason, 2002). A esto se suma la impracticabilidad de experiencias de diálogo formal y las consecuencias de los atentados del 11 de septiembre de 2001. La militarización de la respuesta gubernamental es cuestión de tiempo, lo cual se evidencia con la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe en 2002. Este impulsa una política de confrontación total contra las guerrillas, en aras de aspirar a su derrota militar, y profundamente alineada con el código geopolítico de Washington (Cairo, 2018).

El éxito electoral y de popularidad que dejó consigo todo este entramado de políticas entre la sociedad colombiana del momento —y que explica la reelección de Álvaro Uribe en primera vuelta, en 2006, y su altísima popularidad, a pesar de los excesos que se hacen públicos durante su segundo mandato— guarda relación con el privilegio que tuvo en el debate político el aspecto de la seguridad. Una situación que, ante el reclamo de un Estado fuerte, en términos militares, acaba ofreciendo una clara ventaja a la derecha respecto de la izquierda.

El *leitmotiv* no es otro que el de anteponer la seguridad a cualquier otro derecho, alimentando un imaginario reducido a amigos y enemigos de la PSD. Cualquiera que reclame garantías jurídicas, protección a los derechos humanos o cuestionamientos a las políticas de aspersión de glifosato para la erradicación de cultivos cocaleros

⁵ El Decreto 3398 de 1965 permitía a la sociedad colombiana armarse en la lucha contrainsurgente.

es susceptible de ser concebido como enemigo del Estado. La concurrencia de todos estos hitos hace que el tablero político-partidista gire hacia la derecha, en favor de Uribe, tal y como da cuenta el siguiente relato:

Algo que ha afectado a la izquierda es la esencia del Estado colombiano. Un Estado absolutamente militarista, no solo por el peso que tienen las Fuerzas Militares y la Policía, sino por la ideología militar de crear un enemigo interno de forma que cualquier sector con relevancia en la vida nacional y que tenga una posición crítica y se movilice es comenzado a ser catalogado como ilegal, para terminar siendo llamado terrorista. Ello fue la Política de Seguridad Democrática. Este Estado militar y militarista, mafioso, con una gran ambigüedad entre lo legal y lo ilegal, en donde el recurso para el ejercicio de la violencia política es definitivo. (Entrevista con Iván Cepeda, Bogotá, noviembre de 2021).

El desarrollo de la izquierda yo considero que en Colombia se ha visto lastrado por tres grandes procesos fundacionales, relacionados entre sí: 1) las consecuencias del genocidio desarrollado desde la década de 1980; 2) el ascenso y despliegue nacional del proyecto paramilitar; 3) la intervención norteamericana directa iniciada con el plan Colombia bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. (Entrevista con Piedad Córdoba, Bogotá, noviembre de 2021).

Por tanto, el conflicto armado, ya sea por la afectación de los saboteadores a la búsqueda de la paz, del impacto paramilitar, de la desacreditación violenta de las guerrillas o de la respuesta militarizada del Estado, ha contribuido a debilitar notablemente a la izquierda democrática, tanto a nivel nacional como subnacional. El paramilitarismo y sus expresiones de violencia política posteriores han sido los principales responsables del homicidio violento, de acuerdo con el reciente trabajo publicado por la Comisión de la Verdad (2022); una violencia especialmente dirigida hacia líderes sociales, activistas ambientales, defensores de los derechos humanos o militantes sindicales. Asimismo, entre los opositores a la paz de impronta partidista, se ha producido un claro esfuerzo por restar espacio político a las opciones de izquierda, generalmente, recurriendo a su estigma, criminalizando la protesta social y limitando los escenarios de movilización ciudadana a través del uso continuado de las fuerzas militares.

Incluso hoy, seis años después del acuerdo con las FARC-EP, se contabiliza la muerte violenta de más de 1.800 líderes sociales y 350 excombatientes de la guerrilla, precisamente, en aquellos lugares en donde el reclamo de transformación de la violencia que supone el acuerdo colisiona con los intereses que alimentan la continuidad de las actividades ilícitas directamente ligadas con el conflicto armado (Ríos, 2022).

7. Las dificultades provenientes de un sistema político restrictivo para la izquierda

La suma de un modelo constitucional, de clara orientación social, pero desdibujado por el planteamiento económico que lo acompaña, y un conflicto armado tan longevo como virulento, incorpora, además, otros elementos de naturaleza institucional y no institucional que deben ser considerados en el análisis de las dificultades que han lastrado a la izquierda política colombiana, como reconoce Piedad Córdoba:

La financiación privada de las campañas pone en desigualdad absoluta a los movimientos alternativos respecto de las clientelas oficialistas o partidos que cuentan con el apoyo de grandes gremios y la gran empresa privada. El modelo de lista abierta con voto preferente ha permitido que los partidos de derecha se conviertan en verdaderas franquicias electorales. El mecanismo de representación castiga las regiones e impide el acceso de movimientos alternativos en los departamentos más pobres. No hay autoridad electoral independiente ni un órgano de cierre judicial, pues el Consejo Nacional Electoral y el Registrador son elegidos por el Congreso. A todo eso añadamos una cultura conservadora alimentada por el régimen político, la Iglesia católica, la violencia política y la particular relación con Estados Unidos. (Entrevista con Piedad Córdoba, Bogotá, noviembre de 2021).

Es cierto que el modelo colombiano apuesta por la financiación privada como principal impulsor de las candidaturas, un aspecto que conecta con el personalismo clientelar, la utilización de listas abiertas y la disposición de unos recursos económicos muy superiores en el espectro del partidismo conservador. De hecho, para algunas figuras políticas como Antonio Navarro, esta es la principal cuestión que explicó el derrumbe electoral de la AD M-19, más que lo relativo al texto constitucional en sí:

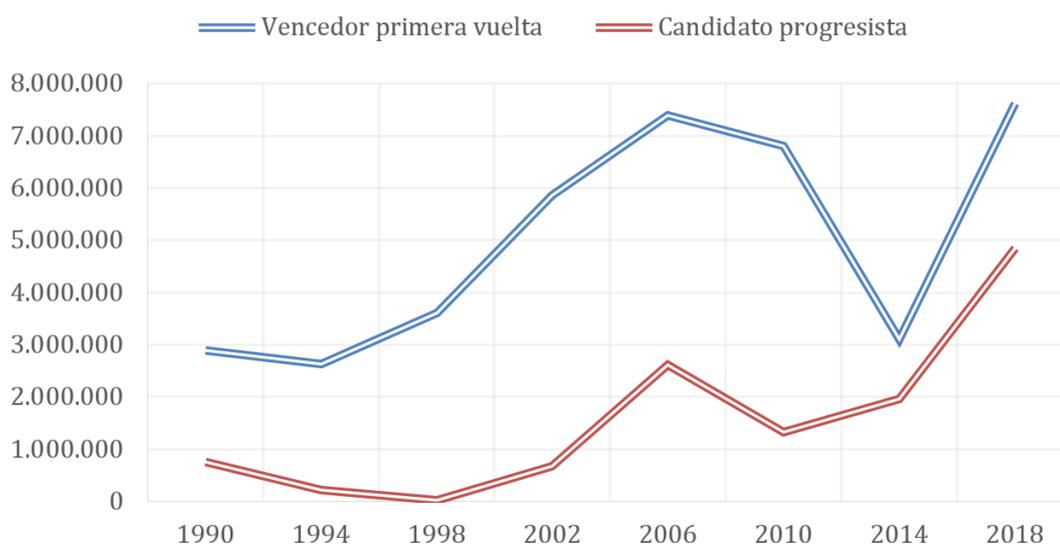
Esa asamblea fue un paso muy importante, pero se enfrentó al clientelismo y el clientelismo terminó derrotándonos. La política tradicional, la compra de votos, el cambio de votos por favores presupuestales, las prebendas nos vencieron. (Entrevista con Antonio Navarro, Bogotá, noviembre de 2021).

Esta cuestión se puede constatar en la información provista por el siguiente gráfico 3, donde se muestran los porcentajes de las candidaturas conservadoras frente a las posiciones de izquierda que, continuamente, han quedado, hasta 2018, muy alejadas de erigirse como alternativa de gobierno. Muchas de estas restricciones para con la izquierda electoral colombiana son compartidas por la totalidad de los entrevistados, de modo que

el propio expresidente, Ernesto Samper, reconoce la seria afectación que para la izquierda representa el sesgo clientelar, estigmatizador y poco garantista del sistema político colombiano:

En este país las garantías electorales se siguen confundiendo con la garantía para que haya elecciones y que es distinto a que verdaderamente haya un juego entre Gobierno y oposición. Lo que prima es un modelo de clientelar a través de las elecciones (...) También la gente confunde conflicto armado con polarización ideológica. La derecha utiliza el miedo, el terror y el estigma sobre las armas para perseguir al que tiene posiciones de izquierda. Eso afecta tanto como el hecho de que el colombiano aprendió a vivir con eso y se acostumbró a vivir con el conflicto armado. Debemos fortalecer el concepto de oposición política, pues tenemos espacios para el ejercicio de la oposición que se adaptan a la nueva movilización social que se está formando en el país. (Entrevista con Ernesto Samper, Bogotá, octubre de 2021).

Gráfico 3. Evolución del voto en las elecciones presidenciales en la primera vuelta (1990-2018)



Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Registraduría Nacional.

En todo caso, en los últimos años se aprecia una tendencia muy al alza de las posibilidades de la izquierda gracias a los resultados obtenidos por Colombia Humana desde las elecciones del pasado 2018. No obstante, este tipo de tendencias aún tienen por delante la remoción y transformación de otros aspectos que tienden a ser recogidos por los entrevistados. Por un lado, está la existencia de una cultura política muy conservadora, a la cual se suman otros factores —además del pragmatismo y clientelismo mencionados— como la existencia de un conglomerado de medios de masas muy afín al establecimiento político, como ha sucedido en medios como *Semana*, *El Tiempo*, RCN o Caracol Televisión bajo las presidencias de Álvaro Uribe o Juan Manuel Santos. Este aspecto no es muy diferente al de otras democracias latinoamericanas, aunque hay medios críticos, como *El Espectador*, y la posibilidad de alternativas informativas a partir del uso de las redes sociales que son consideradas por muchos de los entrevistados:

Los grandes medios de comunicación están al servicio de la clase política corrupta. Arrodillados ante ellos. No hay un medio de comunicación de izquierda. Tenemos medios alternativos, y a estos, desde Comunes, los estamos caminando. En las partes más recónditas del país no falta RCN, ni Caracol ni 11 novelas al día. Eso permea en la gente y tenemos y estamos rompiéndolo (Entrevista con Sandra Ramírez, Bogotá, octubre de 2021).

En relación con los medios, se ha pasado de la crítica general de ser concebidos como órganos con un aparato de ideología dominante, a un entramado con fisuras, rendijas en donde contrarrestar la hegemonía. A partir de las redes sociales es evidente que la cosa toma otro cariz y se da una ruptura del cerco informativo, se puede generar opinión a través de portales, redes y medios alternativos (...) pero sin pasar por alto una cultura política con muchos rasgos heredados de la colonia, un fuerte ingrediente teológico-religioso y una carga moral fuertemente autoritaria y patriarcal resultado de una Colombia que ha ido viviendo una modernización paulatina, pero sin modernidad. (Entrevista con Iván Cepeda, Bogotá, noviembre de 2021).

Finalmente, otra dificultad añadida y reconocida en buena parte de los relatos de los entrevistados reposa en algo ya advertido por este trabajo cuando se analizaba la evolución histórica de la conformación política de la izquierda: su profunda rigidez y atomización. Sin embargo, la ausencia continuada de propuestas integradoras

y de convergencia, más allá de alianzas coyunturales con escaso recorrido, parece encontrar una excepción en el actual Pacto Histórico Nacional:

Uno de los males tradicionales de la izquierda política fue la falta de unidad en la acción. La idiosincrasia de los partidos de izquierda, también en Colombia, era de cuadros, y por mucho tiempo, bajo la clandestinidad. Partidos muy fuertes y jerárquicos que exigían de mayor flexibilidad, para no ser partidos de cuadros ni de tendencias. El actual Pacto Histórico Nacional es la apertura a un pacto social, con gobernanza colaborativa, dirigida por un Gobierno en concertación con el sector privado, pero también con organizaciones sociales, sindicatos, academia y que tiene que llegar hasta el último ciudadano. (Entrevista con Clara López, Bogotá, octubre de 2021).

8. El nuevo escenario de disputa política tras el acuerdo de paz con las FARC-EP

Este argumento esgrimido por Clara López debe integrarse con un aspecto de mayor calado como es el acuerdo de paz, y que para todos los entrevistados, por unanimidad, representa un instrumento de cambio político por varias razones. Primero, por los compromisos de transformación política que incorpora en materia de participación, activismo, concurrencia electoral y democratización de los medios en favor del ejercicio de una oposición política con plenas garantías. Después, porque se difumina el clivaje guerra/paz vigente durante décadas en la disputa partidista colombiana. Es decir, educación, sanidad pública, vivienda o empleo son cuestiones que pueden ser problematizadas, visibilizadas y politizadas de manera diferente, liberando el espacio político para que la izquierda se apropie de ello, tal y como ha sucedido en las elecciones legislativas y presidenciales de 2018 y 2022.

Así, tras muchos años, el conflicto armado no ha sido el *issue* central de la contienda política, y eso ha permitido movilizar sectores de la ciudadanía desencantados que, con el nuevo marco referencia de disputa ideológica, encuentran en la actual situación de derechos económicos, sociales y culturales de Colombia un escenario legítimo para participar electoralmente en favor de la izquierda. Una cuestión esta notoria tras las elecciones recientes de 2022, y especialmente importante en los sectores juveniles o en los mayormente afectados por la violencia estructural, como la región Caribe o el litoral Pacífico.

También han cambiado los repertorios de protesta y movilización ciudadana, como se ha podido observar con las movilizaciones masivas de 2019 y 2021. Este es un tema que redefine el significado del conflicto político y que dota a la ciudadanía de nuevos canales de interlocución para el cambio social, sin la mediación, por ningún lugar, de la violencia armada. Al efecto, es notorio que este aspecto sea reivindicado por los excombatientes de las FARC-EP como una de las principales aportaciones de la desmovilización guerrillera. Aun cuando más bien podría entenderse que la violencia fue un lastre para la izquierda activa desde los movimientos sociales, su reclamo puede entenderse porque contribuye a minimizar los malos resultados electorales obtenidos desde su transformación en partido político:

Muchas de las cosas que están pasando en Colombia se deben al acuerdo con nosotros. Una de las cosas que nos dijo Petro al terminar su campaña de 2018 fue llamarnos a su sede para decirnos que aquel resultado era gracias al acuerdo de paz que firmamos. Nunca lo va a decir públicamente, pero nos llamó y nos lo dijo. El acuerdo de paz ha hecho que la gente se interese más por la política, especialmente los jóvenes. Eso contribuye a cambiar la cultura política de este país, con más expectativas e inquietudes. (Entrevista con *Timochenko*, Madrid, diciembre de 2021).

El acuerdo de paz es una obra reparadora que supone avance y democratización de la democracia. Significa también derrotar a esa clase política corrupta, violenta y mafiosa que se ha anclado en el establecimiento del Estado y que no quiere ceder ni un ápice [...] Tenemos ocho millones de votos, que son de Petro, sí, pero ¿producto de qué? [...]. En las movilizaciones del 2019, del 21-N, la gente pedía dignidad, derechos, salud, educación, todo lo que se ha negado. El acuerdo de paz es la herramienta y la esperanza para que nuestro campo y nuestra sociedad prospere. (Entrevista con Sandra Ramírez, Bogotá, octubre de 2021).

9. Conclusiones

Se ha podido constatar el carácter residual y escasamente protagónico que ha acompañado a la izquierda partidista colombiana en todo el siglo xx. Primero, por la predominancia del Partido Conservador (1886-1930) y el Partido Liberal (1930-1946) y después por las férreas restricciones que impone el Frente Nacional, desde 1958. Aunque desde 1990 comienza a llegar un viento de cambio al modelo colombiano, dada la mayor visibilidad que experimenta la izquierda en ese momento, nuevamente, desde 1994, vuelve a quedar debilitada por la prevalencia que acompaña a las estructuras partidistas tradicionales.

Los discursos de los entrevistados coinciden mayormente en señalar, más allá de las posibilidades sociales y políticas que formalmente evoca la Constitución de 1991, cómo esta terminó desdibujada por el modelo

neoliberal que emerge a comienzos de los noventa, a excepción de las posiciones más conservadoras, de entrevistados como Ernesto Samper, Angelino Garzón o Antonio Navarro. Asimismo, el impacto de la violencia proveniente del conflicto armado, tanto de las guerrillas como del paramilitarismo y de la respuesta militarista estatal, socaba las posibilidades de arraigo político y concurrencia de la izquierda. Esto ocurrió aun cuando entre el discurso de los excombatientes de las FARC-EP se aprecia una relativa autoexculpación, que concibe a la guerrilla más como víctima que como actor protagónico de la violencia. Finalmente, otros aspectos propios del sistema político colombiano, como el sentido de las redes clientelares, el papel de las élites o las afectaciones a la movilización ciudadana y la cultura política son elementos destacados con un amplio margen de consenso.

El acuerdo de paz con las FARC-EP ha liberado un espacio para la izquierda, permitiendo que se difumine el clivaje guerra/paz que condujo la disputa electoral hacia fórmulas conservadoras, en favor de posibilidades renovadas para visibilizar, problematizar y politizar diferentes aspectos sociales, y que permiten transformar el discurso político de la izquierda y su conexión con la ciudadanía. También esta se ha dotado de renovados elementos y de acción colectiva, movilización y protesta, tal y como ha sucedido con las manifestaciones de 2019 y 2021.

Pareciera que, vista la continuidad y presencia de aspectos como los asociados al modelo económico, político y constitucional, el final del conflicto armado con las FARC-EP, y las actuales expectativas de abrir otros procesos de negociación política y jurídica, son elementos de gran peso explicativo para entender que, tras la firma del acuerdo de paz de 2016, la izquierda partidista haya ganado enteros en Colombia.

Trabajos discursivos como el aquí propuesto podrán ser completados por otros que analicen relatos en relación con este mismo objeto de estudio, ya sea en clave territorial, desde el planteamiento de otras formaciones políticas o, inclusive, atendiendo las narrativas surgidas en diferentes militancias de izquierda, bien desde los movimientos sociales o desde la izquierda armada. En cualquier caso, será de esperar la aparición de futuros trabajos que enriquezcan la comprensión del nuevo escenario político surgido en Colombia a partir de este año 2022.

10. Bibliografía

- Acevedo, J., J. Corredor y D. Castillo (2019): “La práctica genocida como política: El caso de la Unión Nacional de Oposición, UNO”, *Revista Cambios y Permanencias*, 10 (1), pp. 100-123.
- Álvaro, M. (2008): “El avance de la izquierda en Colombia”, *Quórum*, 22, pp. 89-99.
- Archila, M. (1997): “El Frente Nacional, una historia de enemistad social”, *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, 24, pp. 189-215
- Ariño, A. (1997): “Ideologías, discursos y dominación”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 79, pp. 197-219
- Basset, Y. (2008): “La izquierda colombiana en tiempos de Uribe”, *Nueva Sociedad*, 214, pp. 4-13.
- Bergquist, C. (2017): “La izquierda colombiana: un pasado paradójico, ¿un futuro promisorio?”, *Anuario Colombiano de Historia Social y Cultural*, 44 (2), pp. 263-299. <https://doi.org/10.15446/achsc.v44n2.64023>
- Borda, S. y A. Tickner (2011): *Relaciones internacionales y política exterior de Colombia*, Bogotá, Uniandes.
- Botero, F., M. García-Sánchez y L. Wills-Otero (2018): *Polarización y posconflicto: Las elecciones nacionales y locales en Colombia, 2014-2017*, Bogotá, Uniandes.
- Cairo, H. (2018): *Las guerras “virtuosas” de George W. Bush*, Madrid, Trama.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2014): *¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*, Bogotá, CNMH.
- CEPAL (2021): *Panorama social de América Latina y el Caribe, 2020*, Chile, Naciones Unidas.
- Comisión de la Verdad (2022): *Hay futuro si hay verdad. Informe Final de la Comisión de la Verdad en Colombia*, Bogotá, CDEV.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2021): *Presentación de Indicadores Relevantes*. Disponible en: <https://www.dane.gov.co/indicadores-relevantes> [Consulta: 14 de septiembre de 2022]
- Duque, J. (2020): “Candidaturas presidenciales en Colombia 1974-2018. Factores condicionantes de su evolución”, *Desafíos*, 32 (2), pp. 1-38. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.7485>
- Estrada, J. (2006): “Orden neoliberal y reformas estructurales en la década de 1990: un balance desde la experiencia colombiana”, *Ciencia Política*, 1, pp. 141-178.
- Federación Nacional de Departamentos (2012): *Aproximaciones conceptuales y empíricas sobre los beneficios de la descentralización territorial y la autonomía regional. Una aportación en beneficio del caso colombiano*, Bogotá, FND.
- Geertz, C. (1987): *La interpretación de las culturas*, Barcelona, Gedisa.
- Gómez-Suárez, A. (2013): “La coyuntura geopolítica genocida de la destrucción de la Unión Patriótica (1985–2010)”, *Estudios Políticos*, 43, pp. 180-204.
- Guedán, M. y R. Ramírez (2005): *Colombia, ¿la guerra de nunca acabar?*, Madrid, Trama.
- Gutiérrez Sanín, F. (2002): *Degradación o cambio. Evolución del sistema político colombiano*, Bogotá, Norma.
- Gutiérrez Sanín, F. y A. Dávila (2000): “Paleontólogos o politólogos: ¿qué podemos decir hoy sobre los dinosaurios?”, *Revista de Estudios Sociales*, 6, pp. 1-11.
- Higuera, I. et al. (2014): *Calidad de la democracia electoral en Colombia. Análisis de la competencia política en los niveles nacional y subnacional, 1988-2014*, Bogotá, Uniandes.
- Hylton, F. (2014): “The Experience of Defeat: The Colombian Left and the Cold War that Never Ended”, *Historical Materialism*, 22 (1), pp. 67-104.
- Leal, F. y A. Dávila (1991): *Clientelismo: el sistema político y su expresión regional*, Bogotá, IEPRI.

- Mason, A. (2002): "Exclusividad, autoridad y Estado", *Análisis Político*, 47, pp. 55- 75.
- Melo, J. (1978): *La crisis de una política*. Disponible en: <http://www.jorgeorlandomelo.com/laizquierda.htm>. [Consulta: 28 de septiembre de 2022]
- Melo, J. (2017): *Historia mínima de Colombia*, Bogotá, Turner.
- Oquist, P. (1978): *Violencia, conflicto y política en Colombia*, Bogotá, Instituto de Estudios Colombianos.
- Palacios, M. (2012): *Violencia pública en Colombia, 1958-2010*, Bogotá, Fondo de Cultura Económica.
- Palacios, M. y F. Safford (2002): *Colombia: país fragmentado, sociedad dividida*, Bogotá, Norma.
- Pécaut, D. (2001): *Guerra contra la sociedad*, Bogotá, Espasa.
- Pécaut, D. (2006): *Crónica de cuatro décadas de política colombiana, 1966-2006*, Bogotá, Norma.
- Pécaut, D. (2006b): "Les FARC: longévité, puissance militaire, carences politiques", *Hérodote*, 123, pp. 9-40. <https://doi.org/10.3917/her.123.0009>
- Pécaut, D. (2011): *Orden y Violencia: Colombia 1930-1953*, Medellín, EAFIT.
- Pécaut, D. (2017): *En busca de la nación colombiana: conversaciones con Alberto Valencia Gutiérrez*, Bogotá, Debate.
- Piedrahíta, J. (2011): *Colombia, una revolución siempre aplazada*, Medellín, Hombre Nuevos Editores.
- Pizarro, E. (2017): *Cambiar el futuro: historia de los procesos de paz en Colombia*, Bogotá, Debate.
- Pizarro, E. (2018): "Colombia: un tsunami político", *Nueva Sociedad*, 276, pp. 13-23.
- Posada-Carbó, E. (2006): "Las elecciones presidenciales en Colombia", *Análisis del Real Instituto Elcano*, 60, pp. 1-7.
- Restrepo, N. (2017): *La profesionalización de las campañas electorales en Colombia: las elecciones presidenciales en Colombia 1994-2014*, Madrid, Universidad Complutense de Madrid.
- Restrepo, N., D. Casas e I. Patiño (2021): "La izquierda en Colombia. Un análisis del Comportamiento electoral en el siglo XXI", *Novum Jus*, 15 (1), pp. 41–68. <https://doi.org/10.14718/novumjus.2021.15.1.3>
- Ríos, J. (2017): "Determinantes geográfico-políticos de la acción violenta guerrillera: un análisis de la concurrencia regional de guerrillas y paramilitares en el conflicto colombiano", *Revista Española de Ciencia Política*, 44, pp. 121-149. <https://doi.org/10.21308/recp.44.05>
- Ríos, J. (2021): *Historia de la violencia en Colombia, 1946-2020. Una mirada territorial*, Madrid, Sílex Ediciones.
- Ríos, J. (2022): "Where is Territorial Peace? Violence, Drug Trafficking and Territory: The Killings of Former Guerrilla Combatants and Social Leaders in Colombia (2016-2021)", *Partecipazione e Conflitto*, 15 (1), pp. 290-314. <https://doi.org/10.1285/i20356609v15i1p290>
- Rodríguez-Villabona, A. (2021): "El Estado como proyecto en la Constitución de 1991", *Análisis Político*, 34 (101), pp. 47-67. <https://doi.org/10.15446/anpol.v34n101.96559>
- Rodríguez-Raga, J. y F. Botero (2006): "Ordenando el caos: Elecciones legislativas y reforma electoral en Colombia", *Revista de Ciencia Política*, 26 (1), pp. 138-151.
- Roldan, M. (1998): "Violencia, colonización y la geografía de la diferencia cultural en Colombia", *Análisis Político*, 35, pp. 3-26.
- Roldan, M. (2010): "End of Discussion: Violence, Participatory Democracy, and the Limits of Dissent in Colombia", en D. Goldstein y E. Desmond. eds., *Violent Democracies in Latin America*, Durham. Duke University Press, pp. 63-83.
- Romero, M. (2002): "Democratización política y contrarreforma paramilitar en Colombia", *Política y Sociedad*, 39 (1), pp. 273-292. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2006000100008>
- Romero, M. (2003): *Paramilitares y autodefensas, 1982-2003*, Bogotá, Planeta.
- Ronderos, T. (2014): *Guerras recicladas: Una historia periodística del paramilitarismo en Colombia*, Bogotá, Aguilar.
- Saffon, M. y D. Güiza (2019): "Colombia en 2018: entre el fracaso de la paz y el inicio de la política programática", *Revista de Ciencia Política*, 39 (2), pp. 217-237. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2019000200217>
- Sandoval, L. (2006): "Invierno y primavera en la política colombiana", *Revista Foro*, 57, pp. 12-24.
- Sandoval, M. (2020): "Aproximaciones históricas y sociológicas Sobre la nueva izquierda democrática en Colombia", *Novum Jus*, 14 (2), pp. 149-169. <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2020.14.2.7>
- Sánchez, G. (1989): "Violencias, guerrillas y estructuras agrarias", en A. Tirado, comp., *Nueva Historia de Colombia. Tomo II. Historia Política, 1946-1986*, Bogotá, Planeta, pp. 127-152.
- Tickner, A. (2007): "Intervención por invitación: Claves de la política exterior colombiana y de sus debilidades principales", *Colombia Internacional*, 65, pp. 90-111.
- Trejos, L. (2011): "Colombia y los Estados Unidos en los inicios de la Guerra Fría (1950-1966). Raíces históricas del conflicto armado colombiano", *Memorias. Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe*, 15, pp. 47-74.
- Umaña, C. (2021): *Paro Nacional 21N: lecciones, retrocesos y desafíos democráticos*, Bogotá, Universidad Externado.
- USAID (2010): *Análisis de Cultura Política de la democracia en Colombia y en las Américas*, Nashville, Vanderbilt University.
- Villamizar, D. (2017): *Las guerrillas en Colombia: una historia desde los orígenes hasta los confines*, Bogotá, Debate.
- Van Dijk, T. (2005): "Ideología y análisis del discurso", *Revista Utopía y Praxis Latinoamericana*, 29, pp. 9-36.